

0039/2022**0042/2022**

En la actualidad, el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración (RD 625/2014), establece una regulación según la cual, en esencia, la persona trabajadora, en caso de contingencia protegida por la incapacidad temporal, una vez que ha acudido al facultativo correspondiente y este ha emitido el parte de baja/alta etc., recibe dos copias de dicho documento, una “para el trabajador” y otra “para la empresa” -que no son enteramente idénticas, por cuanto la primera contiene determinados datos de salud que no se contienen en la segunda-, debiendo entregar esa segunda copia a la empresa, la cual, a su vez, debe remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dichos partes médicos de baja/alta o confirmación que le han presentado los trabajadores, cumplimentados con los datos que correspondan a la empresa, y que son necesarios para que por el INSS se proceda a gestionar o controlar las prestaciones correspondientes a la contingencia protegida de incapacidad temporal del trabajador.

La nueva normativa propuesta pretende la comunicación a la empresa, directamente por la Administración, de la expedición de los partes médicos, e igualmente que aquella comunique a la Administración los datos adicionales que esta precise para la gestión y control de la situación de incapacidad temporal y de la prestación correspondiente a la misma sin necesidad de la previa presentación del parte por el trabajador, evitándose así al trabajador obligaciones burocráticas que, precisamente por estar en incapacidad temporal, pueden resultarle gravosas.

El proyecto de Orden que igualmente se informa consiste en el desarrollo de las previsiones del Real Decreto, y sirve por tanto a la misma finalidad ya descrita.

I

El presente Informe se ciñe a la normativa de protección de datos personales, y en este ámbito cabe señalar primeramente que en la normativa sometida a informe se tratan datos personales de salud del trabajador, los cuales están definidos de manera amplia el RGPD (art. 4.15), como «*datos relativos a la salud*»: *datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria,*

que revelen información sobre su estado de salud; El Tribunal de Justicia (TJUE) interpretó dicho concepto en un sentido amplio, considerando como datos relativos a la salud, la información relativa a todos los aspectos, tanto físicos como psíquicos, de la salud de una persona, tanto relativo a su estado de salud (que se ha lesionado un pie) como que la misma se encuentra en una situación de baja parcial (STJUE de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, C-101/01).

Respecto de estos datos de salud, su tratamiento requiere no sólo una base jurídica de las establecidas en el art. 6 RGPD, sino una causa que levante la prohibición genérica de tratamiento prevista en el art 9.1 RGPD.

Hay que partir de lo dispuesto en la actualidad en el art. 71.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (TRLGSS), según la redacción dada a este precepto por la disposición final 5.2 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero:

*3. En los procedimientos de declaración y revisión de la incapacidad permanente, a efectos de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social, así como en lo que respecta al reconocimiento y control de las prestaciones por **incapacidad temporal**, orfandad o asignaciones familiares por hijo a cargo, las instituciones sanitarias, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas colaboradoras **remitirán a las entidades gestoras de la Seguridad Social los informes, la historia clínica y demás datos médicos**, relacionados con las lesiones y dolencias padecidas por el interesado que resulten relevantes para la resolución del procedimiento.*

*Los inspectores médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones, cuando sea necesario para el reconocimiento y control del percibo de las prestaciones de los trabajadores pertenecientes al sistema de la Seguridad Social, y para la determinación de contingencia, así como los médicos de sanidad marítima adscritos al Instituto Social de la Marina, para llevar a cabo los reconocimientos médicos de embarque marítimo, informando de estas actuaciones, y en los términos y condiciones que se acuerden entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, **tendrán acceso electrónico y en papel a la historia clínica** de dichos trabajadores, existente en los servicios públicos de salud, en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en las empresas colaboradoras y en los centros sanitarios privados.*

*Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias de reconocimiento y control de las prestaciones, **recibirán los partes médicos de incapacidad temporal expedidos por los***

servicios públicos de salud, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas colaboradoras, a efectos del tratamiento de los datos contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras y las entidades colaboradoras con la Seguridad Social podrán facilitarse, recíprocamente, los datos relativos a las beneficiarias que resulten necesarios para el reconocimiento y control de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

La inspección médica de los servicios públicos de salud tendrá acceso electrónico a los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

*En los supuestos previstos en este apartado no será necesario recabar el consentimiento del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los **artículos 6.1. e) y 9.2 h)**, del Reglamento (UE 2016/679) del Parlamento y el Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).*

Como puede observarse, el legislador ha determinado de un modo amplio la posibilidad de que para los fines previstos en este precepto se pueda acceder y tratar datos de salud. La base jurídica elegida por el legislador es la del art. 6.1. e) RGPD (el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento), y como causa que levanta la prohibición del art. 9.1 RGPD, la del art. 9.2. h) RGPD (el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social (...)).

Se cumple por tanto lo dispuesto en el art. 9.2 de la LOPDGDD:

*2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una **norma con rango de ley**, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.*

*En particular, dicha norma podrá amparar el **tratamiento de datos en el ámbito de la salud** cuando así lo exija la **gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social**, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.*

II

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental, cuyo contenido consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso» (STC76/2019, de 22 de mayo, y STC 292/2000, de 30 de noviembre). Pero, además, estas sentencias señalaron igualmente la necesidad de que la injerencia esté prevista en una ley o norma de la Unión Europea, con respeto, en todo caso, al principio de proporcionalidad.

En concreto, el Tribunal Constitucional, en la ya citada STC 76/2019, de 22 de mayo, tras citar, entre otras, a su anterior STC 292/2000, de 30 de noviembre, señala:

*- En segundo lugar, por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas ora incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE), ora limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), **precisa una habilitación legal** (por todas, STC 49/1999, de 5 de abril, FJ 4). En la STC 49/1999, FJ 4, definimos la función constitucional de esa reserva de ley en los siguientes términos:*

Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos "únicamente al imperio de la Ley" y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996) constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por eso, en lo que a nuestro Ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981, fundamento jurídico 10)."

*Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, **por otro lado, esa norma legal "ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la***

seguridad jurídica”, esto es, “ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención” (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, “no sólo excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites” (STC 292/2000, FJ 15).

Además, dicha ley deberá respetar en todo caso el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero:

“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto; SSTC 66/1995, de 8 de mayo [RTC 1995, 66] , F. 5; 55/1996, de 28 de marzo, FF. 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre, F. 4.e; 37/1998, de 17 de febrero, F. 8; 186/2000, de 10 de julio, F. 6).”

La misma doctrina sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, si el art. 8 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan, el art. 52.1 reconoce que ese derecho no es ilimitado y permite la limitación del ejercicio de esos derechos y libertades reconocidos por la Carta, limitación que deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de los mismos.

La STJUE de 6 de octubre de 2020, en los casos acumulados C-511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros, en su apartado 175, recuerda que:

En cuanto a la justificación de dicha injerencia, cabe precisar que el requisito, previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que la permita debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020,

Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

Igualmente, el apartado 65 de la Sentencia (STJUE) de la misma fecha 6 de octubre de 2020 (C-623/17), Privacy International contra Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs y otros, con cita, como la anterior, de la sentencia Schrems 2, dice:

65 Cabe añadir que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate (sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, apartado 175 y jurisprudencia citada).

En definitiva, el apartado 175 de la STJUE de 16 de julio de 2020, C-311/2020, Schrems 2, dice:

Cabe añadir, sobre este último aspecto, que el requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales deba ser establecida por ley implica que la base legal que permita la injerencia en dichos derechos debe definir ella misma el alcance de la limitación del ejercicio del derecho de que se trate [dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 139 y jurisprudencia citada].

Es pues, la misma ley que establece la injerencia en el derecho fundamental la que ha de determinar las condiciones y garantías, esto es, el alcance y la limitación, que han de observarse en dichos tratamientos,

Y en dicha STJUE de 16 de julio de 2020, Schrems 2, se añade (y se reitera posteriormente en las citadas sentencias de 6 de octubre de 2020):

176 Finalmente, para cumplir el requisito de proporcionalidad según el cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esa protección no deben exceder de lo estrictamente necesario, la normativa controvertida que conlleve la injerencia debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de la medida en cuestión e impongan unas exigencias mínimas, de modo que las personas cuyos datos se hayan transferido dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos de carácter personal contra los riesgos de abuso. En particular, dicha normativa deberá indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario. La necesidad de disponer de tales garantías

reviste especial importancia cuando los datos personales se someten a un tratamiento automatizado [véase, en este sentido, el dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartados 140 y 141 y jurisprudencia citada].

Como ya mencionamos más arriba en este informe, la STC 76/2019, tan reiterada, dispone:

*Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, **esa norma legal** «ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica», esto es, «ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, «no sólo **excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias** [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites» (STC 292/2000, FJ 15).*

Dicha sentencia añade la necesidad de contar con garantías adecuadas a los tratamientos que se pretendan llevar a cabo, con especial cuidado cuando aquellos tratamientos envuelven datos de categorías especiales, como es aquí el caso, porque, como añade el Tribunal Constitucional:

*Por último, debemos recordar que el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, **no establece por sí mismo el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales**, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, **tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles**, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso. Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas no prevé esas garantías adecuadas, **sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de***

protección de datos, no puede considerarse que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige.

III

En el presente caso, se han identificado suficientemente en la ley (art. 71.3 TRLGSS) las finalidades de las injerencias en el derecho fundamental (esto es, las finalidades de los tratamientos de datos), como son la gestión de los procedimientos de declaración y revisión de la incapacidad permanente, a efectos de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social, así como en lo que respecta al reconocimiento y control de las prestaciones por incapacidad temporal, orfandad etc.

Al mismo tiempo, esta Agencia considera que la Administración de la Seguridad Social (entendiendo por esta a todas las autoridades previstas en el art. 71.3 TRLGSS citado), al poder recabar para esos fines la historia clínica de los trabajadores, y regularse esta en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, está sujeta a las salvaguardas y garantías establecidas en esta ley 41/2002 para su uso. Esta consideración permitiría salvar la circunstancia de que el art. 71.3 TRLGSS no establece, en sí mismo, estas garantías para los tratamientos de datos personales que se lleven a cabo para el cumplimiento de estos fines.

IV

La esencia de la modificación propuesta en las normas sometidas a informe se recoge en la nueva redacción del art. 7.2 del Proyecto de Real Decreto. En la nueva redacción se sustituye la obligación de entrega por el trabajador del parte médico a la empresa del “parte médico destinado a ella” (ahora recibe sólo un parte médico, en vez de dos) por la obligación impuesta al INSS de comunicar a la empresa los datos relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta correspondientes a sus trabajadores y trabajadoras ***que se determinen en el desarrollo de este real decreto*** -que a su vez han recibido directamente, por vía telemática- de servicio público de salud, de la mutua o de la empresa colaboradora, según el caso. A su vez, las empresas tienen la obligación de transmitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, ***los datos que se determinen en el desarrollo de este real decreto***.

Ello plantea dos cuestiones. La primera de ellas es que, al contenerse en una norma reglamentaria (el Proyecto de Real Decreto) la determinación de los datos personales que han de ser objeto de comunicación por el INSS a las empresas -tratamiento de datos-, ello incumpliría la necesidad de que los tratamientos de datos de salud estén determinados por una norma con rango

de ley, sin llamamiento a una norma reglamentaria (véase la ya citada STC 76/2019):

*Esta doble función de la reserva de ley se traduce en una doble exigencia: por un lado, la necesaria intervención de la ley para habilitar la injerencia; y, por otro lado, **esa norma legal** «ha de reunir todas aquellas características indispensables como garantía de la seguridad jurídica», esto es, «ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención» (STC 49/1999, FJ 4). En otras palabras, «no sólo **excluye apoderamientos a favor de las normas reglamentarias** [...], sino que también implica otras exigencias respecto al contenido de la Ley que establece tales límites» (STC 292/2000, FJ 15).*

Los datos que el INSS puede tratar, comunicándoselos a la empresa, no viene determinados sino por una norma de rango reglamentario, y menor (la Orden), con lo que incumpliría el mandato constitucional de que sea la ley, en sí misma, la que haya de establecer “*todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de la intervención*”.

Es la Orden Ministerial (nuevo artículo 10) la que establece cuáles son esos datos que el INSS ha de comunicar a las empresas, y lo hace por sustracción de entre los datos del parte médico.

*De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicará a la empresa, por medios telemáticos a través del Fichero “INSS EMPRESAS” del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED) y como máximo en el día hábil siguiente al de su recepción en dicho Instituto, los datos relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta, emitidos por los facultativos del servicio público de salud o de la mutua referidos a sus trabajadores y trabajadoras, **excluidos los relativos a la descripción de la limitación de la capacidad funcional /resultado del reconocimiento médico, diagnóstico, diagnóstico de confirmación, descripción de la limitación funcional en la fecha del parte de confirmación, Códigos CIE-9 o CIE-10, código de enfermedad profesional, tipo de asistencia y parte del cuerpo dañada (en caso de accidente de trabajo).***

Pues bien, **esta Agencia considera que deberían de incluirse en la regulación legal (norma con rango de ley)** las salvaguardias y garantías necesarias para evitar que una modificación reglamentaria pueda determinar el tratamiento de datos de salud especialmente protegidos por las empresas (esto es, que una simple Orden pueda modificar los datos que han de ser comunicados por el INSS a las empresas, en relación con la salud de los trabajadores). Esta regulación planteada en los proyectos sometidos a informe no es suficiente, pues bastaría una simple modificación de la Orden para que

podrían normativamente comunicarse datos especialmente protegidos a las empresas, que ni las necesitan para el tratamiento de datos para sus fines en relación con la incapacidad temporal (pago delegado) ni estaría por supuesto justificado (principio de minimización de datos, y de limitación de la finalidad, art. 5.1.b) y c) del RGPD).

En consecuencia, se propone la inclusión **en la ley** de la salvaguarda de que la comunicación por el INSS a las empresas sólo procederá respecto de aquellos datos que sean necesarios para la finalidad específica de que las empresas puedan llevar a cabo lo necesario para la finalidad específica del pago delegado para la prestación económica por la contingencia de incapacidad temporal, sin que puedan entenderse comprendidos datos que no sean imprescindibles para esta finalidad, y ello no comprenderá en ningún caso la patología médica, resultado del reconocimiento médico, códigos de enfermedad o cualquier otra que sirva para identificar la patología etc.

Con la regulación anterior, en la que había dos modelos de parte médico, que no contenían información idéntica, sino que el destinado al trabajador contenía la información médica específica de la patología, y la destinada a la empresa no contenía dicha información, sino la relativa a fechas probables de alta, duración estimada del proceso de baja etc., no se planteaba de manera idéntica el problema, puesto que el trabajador entregaba a la empresa el parte médico sin la información sensible.

V

Respecto de los datos que la empresa ha de transmitir al INSS según el Anexo III del Proyecto de Orden, se observa que estos son datos “económicos”, y no relativos a la salud de los trabajadores, por lo que este tratamiento (cesión) puede entenderse incluido en el art. 71.1.c) TRLGSS, según el cual, *[l]os empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social los datos que estas les soliciten, [...] en el reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad Social relativas a sus trabajadores.*

VI

Por último, se sugiere la supresión del último párrafo del art. 11.3 del proyecto de Orden, que dice así:

En todo caso, la transmisión, cesión, tratamiento y explotación de los datos recogidos en las comunicaciones a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con los artículos 6 y 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y los artículos 71 y 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Las referencias a los artículos 6 y 9 RGPD, como base jurídica de los tratamientos son aquí innecesarias, por redundantes, puesto que una Orden no constituye una norma de rango legal, y además ya se recogen las bases en el citado art. 71.3 TRLGSS. Lo mismo respecto de la mención a los arts. 8 y 9 LOPDGDD.

Pero, además, llama la atención de esta AEPD la mención al término “explotación” respecto de los datos personales recogidos en las comunicaciones de los empresarios a que hace referencia el art. 11 del proyecto de Orden. Es de recordar que el tratamiento de los datos personales para finalidades diferentes de las encomendadas por el ordenamiento a la Administración de la Seguridad Social en los casos establecidos en el art. 77 TRLGSS.

Se sugiere, por tanto, como se ha mencionado, suprimir este apartado.